

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Que don Alberto Fontena Araneda, abogado, en representación de Importadora Y Comercializadora Fullsen Limitada, interpone recurso de reclamación por ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N°35.551 de 13 de diciembre de 2022, que rechazó el Recurso de Reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N°13.838, de 14 de septiembre de 2022, ambas dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por las que se sanciona a la reclamante por la importación de productos sin contar con sus respectivos certificados de aprobación, emitidos por un Organismo de Certificación autorizado por la Superintendencia.

Expone que los cargos le fueron formulados por Oficio Ordinario N°125.039 de 7 de julio de 2022 por: i) comercializar productos eléctricos sin contar con sus correspondientes Certificados de Aprobación vigentes que los amparen, otorgados por un Organismo de Certificación autorizado por la Superintendencia, lo que constituye una transgresión a lo establecido en el artículo 27°, letra a), del D.S. N°298 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de acuerdo al artículo 3°, N°14, de la Ley 18.410; ii) comercializar los productos denominados Lámpara led con balasto sin contar con sus correspondientes Certificados de Aprobación de Eficiencia Energética que los amparen, lo que constituye una transgresión a lo establecido en el artículo 3°, N°14 de la Ley 18.410, y los artículos 6° y 27° letra d), del D.S. N°298 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; iii)



no cumplir con el requerimiento de información en relación a lo solicitado en el punto 3 del Oficio Ordinario N°102.873, de fecha 26 de enero de 2022 y en el punto 5 del Oficio Ordinario N°116.310, de fecha 11 de mayo de 2022; transgrediendo lo establecido en el artículo 3° A, inciso final de la Ley N°18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Explica que la resolución recurrida afirma que la reclamante fue notificada por Correos de Chile con fecha 7 de febrero de 2020, y habiendo vencido el plazo otorgado, no se presentaron descargos.

Refiere que, en virtud de lo anterior, la Superintendencia, mediante la resolución recurrida, resuelve aplicar las siguientes multas: i) Multa de 150 UTM por la infracción señalada en el punto 4.1 del Considerando 4° de la Resolución, comercializar productos eléctricos sin certificados de aprobación vigentes, lo que transgrede el artículo 27°, letra a), del D.S. N°298 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de acuerdo al artículo 3°, N°14, de la Ley 18.410; ii) multa de 48 UTM por la infracción señalada en el punto 4.3 del Considerando 4° de la Resolución, esto es, no cumplir con el requerimiento de información en relación a lo solicitado en el punto 3 del Oficio Ordinario N°102.873 de 2022 y en el punto 5 del Oficio Ordinario N°116.310 de 2022, transgrediendo, el artículo 3° A, inciso final de la Ley N°18.410.

Acusa que el procedimiento administrativo presenta graves vicios de legalidad, toda vez que no se han respetado principios básicos de todo debido proceso, ya que la formulación de cargos mediante Oficio Ordinario N°125.039 de fecha 7 de julio de 2022, jamás le fue notificada, vulnerando su derecho a defenderse, pues luego de los cargos, se lo sancionó.



Respecto a las sanciones impuestas en Resolución Exenta Electrónica N°13.838 de 14 de septiembre de 2022, aduce que emanan de un procedimiento viciado al no haber mediado notificación de los cargos que se le imputaron.

En cuanto a la infracción N°1, explica que la reclamante adquirió los productos a sus importadores directos de China. En este sentido, sostiene que la normativa obedece a un principio de eficiencia económica, pues es quien está en la posición que ocasiona menores costos quien debe preocuparse de la obtención de las certificaciones respectivas, de otro modo el efecto económico en la cadena de comercializadores sería un encarecimiento insostenible. De esta forma, explica que confía en que su proveedor cumpla con sus obligaciones legales, pues la confianza es la base del comercio y la mala fe no se puede presumirse.

Agrega que la verificación que deben efectuar los comercializadores, conforme al artículo 13 del D.S. N°298, no puede extenderse al nivel de detalle y precisión que resulta exigible para el fabricante o importador, debe ser una verificación razonable. Refiere que acostumbra a consultar con su proveedor por la existencia de los certificados respectivos, y dado que hasta el momento no había tenido problemas con los productos que les proveen, no resultaba razonable desconfiar de la veracidad de los sellos proporcionados por quien está normativamente encargado de obtenerlos.

Entiende que el deber que recae sobre la reclamante de mantener a disposición del público general, independientemente del sistema de venta que utilice, el certificado de aprobación del producto o resolución de autorización emitida por la



Superintendencia, se correlaciona con el artículo 4.10 del D.S. en el cual se indica que el distintivo que se use para mostrar la certificación puede ser “la sigla o marca de un organismo de certificación que es utilizada para mostrar que un producto ha sido certificado por dicha entidad”. Luego, concluye que los productos adquiridos al importador están certificados, pues así se le ha informado y se le han exhibido los sellos correspondientes, y cumple con el mostrarle al público que el producto tiene certificación.

En cuanto a la infracción N°2, no cumplir con el requerimiento de información, reitera que nunca fue notificada de dichos requerimientos.

En cuanto al monto de la multa, destaca que no hay ninguna consideración que se trata de ventas al detalle de productos de bajísimo precio. Que es una empresa pequeña para la que el monto de total de las multas impuestas (203 UTM), representa un porcentaje importante de su caja, lo que le dificulta enormemente su funcionamiento.

Reclama que no hay suficiente fundamentación respecto al monto de la sanción, pues el acto reclamado se limita a expresar que se tuvieron en cuenta los criterios contenidos en el artículo 16 de la ley 18.410, y que el monto de la multa está en directa relación con la naturaleza de la infracción cometida.

Explica que el acto impugnado solo hace una mención genérica a las circunstancias contempladas en el inciso segundo del artículo 16, pero no señala cuál o cuáles de dichas seis circunstancias resultan aplicables al caso. Al no existir esta fundamentación la resolución se mueve desde el piso del monto previsto para las multas, sin una verdadera justificación para hacerlo.



Pide dejar sin efecto los actos reclamados por carecer de la debida fundamentación, con costas. En subsidio, pide rebajar el monto de la multa, de conformidad con los principios de justicia y equidad.

Segundo: Que, informado al tenor de lo ordenado en autos, el Jefe de la División Jurídica (S) de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, expone que entre agosto y noviembre de 2021 la reclamante declaró en aduanas 70.028 artefactos: freidoras eléctricas, lámparas LED con balasto, extensiones eléctricas, cafeteras eléctricas, impresoras, onduladores eléctricos de cabello, alisadores eléctricos de cabello y exprimidores eléctricos, avaluados en US\$104.955, de acuerdo a la información aportada por el Servicio Nacional de Aduanas producto de las Declaraciones de Ingreso de Aduanas realizadas por la sancionada.

Atendido que los artefactos indicados no aparecían en la base de datos donde los organismos de certificación informan los productos certificados, mediante Oficio Ordinario N°102.873, de fecha 26 de enero de 2022, se requirió información a FULLSEN. Sin embargo, el administrado no respondió, como tampoco lo hizo luego de la reiteración del requerimiento el 11 de mayo de 2022, siendo que desde el día 1 de febrero estaba en conocimiento de la solicitud de información, como consta de los seguimientos de Correos de Chile números 1178704535247 y 1178730678086. Posteriormente, se le aplicó la sanción reclamada, y de la formulación de cargos (seguimiento de Correos de Chile N°1179921409403), por recaer la prohibición de comercialización de artefactos no certificados en todo comercializador de la cadena de distribución (fabricante, importador, distribuidor mayorista,



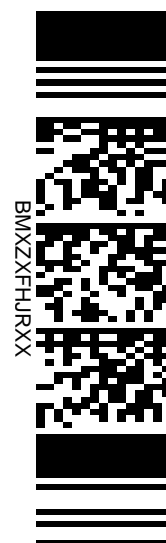
distribuidor minorista, proveedor final) y aparecer en el expediente que se trataba de diferentes productos que alcanzaban las 78.028 unidades y que la operación superaba los USD\$100.000.

En cuanto al derecho, explica que de acuerdo con el artículo 3° N°14 de la Ley N°18.410 en Chile no se pueden comercializar productos sometidos al sistema nacional de certificación de productos eléctricos y de combustibles sin antes encontrarse amparado dentro del alcance de un certificado de aprobación. De esta manera, el D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Certificación, complementa lo anterior fijando en el artículo 27, letra a), como una infracción administrativa comercializar productos sin previo certificado de aprobación.

Consigna que el artículo 3°A de la Ley N°18.410 establece que la Superintendencia puede requerir información a sus fiscalizados, constituyendo una infracción administrativa la no entrega de los antecedentes requeridos por la Autoridad.

Destaca que el artículo 22 de la Ley N°18.410, establece que los destinatarios de los actos de la Superintendencia se tendrán por notificados al tercer día siguiente de la recepción por Correos de Chile de la carta certificada que los contiene. Imponiendo el deber a los administrados de entregar al Estado domicilios efectivos y mantener diligentemente el cuidado de recepcionar las cartas certificadas que tienen como remitente a la Autoridad y, por otra parte, fija en el destinatario de la carta certificada la carga de desmentir lo registrado por Correos de Chile.

En cuanto a la controversia, explica que la Superintendencia verificó de la información pública de la empresa Correos de Chile



que en el seguimiento de las cartas certificadas que contenían los actos emitidos en el procedimiento administrativo, se habían efectivamente entregado a sus destinatarios, según los hechos relatados más arriba. Pide tener en cuenta que consta en el expediente administrativo que la reclamante pudo presentar reposición de la sanción enviada a la calle Bascuñan Guerrero N°272, comuna de Santiago, como también pudo presentar reclamación judicial en contra de la resolución que resuelve la impugnación que se había enviado al mismo domicilio, mismo que tenía por destino en los requerimientos de información y la formulación de cargos. Además, que la reclamante no aportó prueba alguna para desvirtuar la notificación.

En cuanto al sujeto activo del tipo infraccional aplicado, la Ley no distingue y el reglamento complementario explícitamente consigna comercializadores. Habla de fabricantes, importadores y comercializadores. pero atendido que se trata de millones de artefactos y de miles de canales de distribución, la regulación establece un mecanismo de auto fiscalización entre los privados, incentivando que los clientes de los importadores y fabricantes únicamente adquieran artefactos previamente certificados, que los distribuidores o proveedores finales exijan a sus proveedores los certificados de la mercadería que están adquiriendo, de lo contrario no podrán comercializar tal mercadería sin configurar una infracción administrativa. Sería un despropósito que un producto no certificado lo pueda vender un comercializador final y no un importador.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción aplicada, pide considerar el peligro ocasionado a la integridad física de las



personas, pues el sancionado puso a disposición del público más de 75.000 artefactos peligrosos de distinta naturaleza y que entran en contacto directo con el cuerpo de las personas, sin antes conocer si cumplían con los estándares mínimos de seguridad.

Se debe considerar también que solo el costo de los artefactos que se comercializaban era más de USD\$100.000.- lo que permite tener como razonable la multa aplicada.

Agrega que la reclamante ha desobedecido reiteradamente a la autoridad y sin perjuicio de ello, se le aplicaron 203 UTM dentro de una tolerancia de 1 a 6000 UTM de acuerdo con el artículo 16 A de la Ley N°18.410.

Pide el rechazo del reclamo.

Tercero: Que en cuanto a la supuesta falta de notificación del requerimiento de información y de la formulación de cargos, cabe tener en cuenta que la Superintendencia reclamada ha individualizado las constancias de correos de Chile relativas a las cartas de notificación respectivas, siendo exclusiva responsabilidad del fiscalizado mantener en los registros de la Superintendencia un domicilio en el que pueda recibir sin inconvenientes las notificaciones que le despache la autoridad.

De esta manera, la reclamante tenía la carga de demostrar la falta de las notificaciones que acusa como no efectuadas, sin que haya aportado antecedente alguno en este sentido, ni en sede administrativa ni ante esta Corte, de modo que su reclamo no puede ser atendido en este aspecto.

Cuarto: Que no se encuentra discutida la existencia de los hechos que sustentaron la infracción, por cuanto la reclamante



intenta justificar su conducta argumentando que corresponde a su proveedor verificar la existencia de los certificados respectivos.

Quinto: Que el inciso segundo del número 14 del artículo 3 de la Ley 18.410 dispone que *“Los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que, de conformidad con la normativa vigente, deban sujetarse a la certificación prevista en el párrafo anterior, no podrán comercializarse en el país sin contar con el o los respectivos certificados y con la respectiva etiqueta de consumo energético, de ser ésta exigible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° del decreto ley N° 2.224, de 1978. Tratándose de artefactos que utilicen como combustible leña y otros productos dendroenergéticos, los correspondientes certificados deberán, además, acreditar el cumplimiento de las normas de emisión dictadas en conformidad al artículo 40 de la ley N° 19.300 o al artículo 44 de la misma ley. Para estos efectos, el Ministro de Energía se considerará uno de los ministros competentes o sectoriales”*.

La norma citada establece claramente una prohibición de comercialización de los productos eléctricos en ella señalados, cuando carecen de la certificación de seguridad y eficiencia energética, regla que indudablemente apunta a la seguridad del consumidor y que, en consecuencia, debe entenderse aplicable a todos los actores en la cadena de venta y distribución de tales productos, desde el importador hasta aquel que hace la venta al consumidor final, pues su finalidad se vería frustrada si, como pretende la reclamante, se entendiera que solo se encuentran sujetos a la norma los importadores.



De esta forma, en ningún caso la argumentación desarrollada en el reclamo lo excusa de la infracción constada por la Superintendencia.

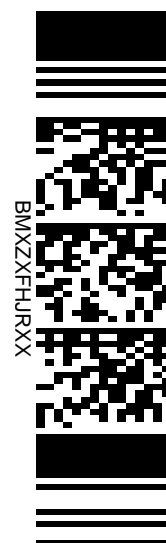
Sexto: Que en lo que respecta al monto de la multa y su fundamento. El ente reclamado, al momento de fundar el monto de la multa, justificó que tuvo en cuenta las consideraciones establecidas en el artículo 16 de la Ley N 18.410.

En este sentido, se ha informado que el fundamento detrás de las sanciones en este plano se encuentra en los potenciales riesgos a la integridad física de las personas a causa de no contar los productos con sus correspondientes certificados de aprobación, pues ello impide conocer su estándar de seguridad.

A lo anterior cabe agregar que, como se hizo presente en estrados, la reclamante es reincidente en esta misma infracción, habiendo sido sancionada en diversas oportunidades por la misma conducta, como consta en los roles 91-2018 y 270-2019 de esta misma Corte de Apelaciones.

De esta manera, la multa total de 203 UTM aplicada en este caso, aparece como adecuada si se considera que el margen de movimiento de la Administración ante este tipo de infracciones, le permite llegar hasta las 6.000 UTM, de suerte que la multa se ubica en la parte baja de la banda. A lo que cabe agregar que se trata de más de 70 mil productos, en una operación que supera los 100 mil dólares solo considerando el costo de adquisición para el reclamante, con lo que la sanción aplicada no se aprecia como excesiva o desproporcionada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 3A, 3D, 15, 16, 17, 19 de la Ley N 18.410, se



rechaza el reclamo interpuesto en contra de la Resolución Exenta N°35.551 de 13 de diciembre de 2022, que rechazó el Recurso de Reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N°13.838, de 14 de septiembre de 2022, ambas dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

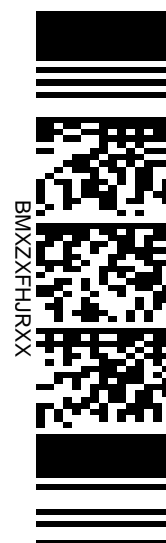
Redactó el abogado integrante, señor Gutiérrez S, no firma el mismo por haber terminado funciones en esta Corte.

N° Contencioso Administrativo-680-2022.



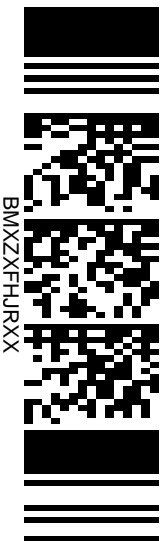
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Ana Maria Osorio A. y Ministro Suplente Carlos Escobar S. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>